



Valledupar, diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

REFERENCIA: INSOLVENCA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE.

CONVOCANTE: ROSSANA MANUELA PITRE SUAREZ

RADICADO: 200014003003 2021 00038-00.

I. ASUNTO A RESOLVER

Se recibe del Centro de Conciliación de la Fundación Liborio Mejía el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante iniciado por la señora Rossana Manuela Pitre Suarez, con el fin de que se resuelva la objeción presentada por la Cooperativa Medica de Antioquia "COMEDAL" a través de su apoderada, con relación a la cuantía de la obligación que tiene la deudora con Comedal.

EL eje central de la objeción gravita en que, la deudora dentro del trámite de negociación de deudas indico ante el operador de insolvencia que, la obligación que sostenía con COMEDAL oscilaba en la suma de \$3.480.000.

Por su parte la apoderada de COMEDAL objetó la cuantía de la obligación señalando que la obligación de la señora Rossana Manuela Pitre Suarez esta por valor de \$19.163.481, pues los abonos a los que hace mención la deudora no se registran en sus estratos en la suma que la deudora indica, que la consignación realizada el pasado 28 de febrero de 2019 no corresponde a la suma de \$7.300.000, sino que se reporta en su cuenta es por valor de \$2.300.000.

Continua manifestando la objetante que, los pagos realizados por la deudora corresponden al elaborado el 14 de diciembre de 2018 por valor de \$6.798.000 y los realizados el 28 de febrero de 2019 por valor de \$2.300.000 y \$50.000.

Para soportar sus manifestaciones aportan informe consolidado de la cuenta corriente que la cooperativa maneja como producto financiero ante la entidad bancaria Bancolombia, donde da cuenta del monto de las consignaciones realizadas por la deudora.

Al correrse el traslado de la objeción propuesta por la Cooperativa Médica de Antioquia "COMEDAL", la deudora Rossana Manuela Pitre Suarez, por intermedio de su apoderada, señaló que en conversación con un asesor comercial de la feria de cartera que realizó la entidad en la ciudad de Medellín junto con el apoderado de la cooperativa para esa época, acordaron con su representada realizar un pago en tres cuotas hasta el 14 de enero de 2019.

Fue así como, la deudora procedió a realizar una primera consignación por la suma de \$6.798.000 el 14 de diciembre de 2018, y dos más el 28 de febrero de 2019 por valores de \$7.300.000, lo cual demuestran con los recibos de las consignaciones que fueron realizadas en Bancolombia. Indica la abogada que no entiende como se



fraccionaron los valores que reporta en sus extractos la cooperativa si su apadrinada solo hizo una transacción.

Que procedieron a reportar dentro de la negociación de deudas como valor adeudado la suma de \$3.4080.000, reconociendo que no cancelaron la obligación en la fecha indicada por el asesor, sin embargo, no les parece razonable la información dada por la cooperativa al solicitar el saldo de la obligación la cual le fue reportada en \$5.200.000, teniendo en cuenta los intereses y gastos de cobranza.

Que recaía en cabeza de la COMEDAL solicitar al banco aclaración sobre el particular hecho del monto en la consignación, ya que ella les había demostrado el pago con el recibo de la consignación realizada.

Para zanjar esta objeción, debe referirse en primer término que respecto del trámite que debe dársele a las objeciones, quedó establecido en el artículo 552 del C.G.P. que si no se conciliaren las objeciones en la audiencia, el conciliador la suspenderá por diez (10) días, para que dentro de los cinco (5) primeros días inmediatamente siguientes a la suspensión, los objetantes presenten ante él y por escrito la objeción, junto con las pruebas que pretendan hacer valer. Vencido este término, correrá uno igual para que el deudor o los restantes acreedores se pronuncien por escrito sobre la objeción formulada y aporten las pruebas a que hubiere lugar. Los escritos presentados serán remitidos de manera inmediata por el conciliador al juez, quien resolverá de plano sobre las objeciones planteadas, mediante auto que no admite recursos, y ordenará la devolución de las diligencias al conciliador.

Se interpreta de la norma anterior que, el juez al momento de resolver las objeciones debe ampararse en las pruebas aportadas por las partes, fue así, que en el traslado de las excepciones tanto objetante como deudor, aportaron como pruebas documentos idóneos para lograr demostrar los hechos que previamente habían expuesto. No obstante, dichas pruebas generan una dicotomía al momento de generar el despacho el convencimiento necesario para emitir un pronunciamiento, razón por la cual se estima conveniente inaplicar el precepto legal contenido en el artículo 552 del CGP, en lo referente al sometimiento de la resolución de la objeción a las pruebas aportadas por las partes, puesto que, como ya se dijo, no se encuentra el mérito suficiente por la calidad de pruebas allegadas para decidir en favor de alguna de las partes.

En el ordenamiento jurídico colombiano se ha establecido la figura del control constitucional que de forma concentrada ejerce en abstracto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, eh lo de sus respectivas competencias, así como el control constitucional difuso a cargo de cada uno de los jueces en los procesos sometidos a su consideración y en aplicación directa del artículo 4 de la carta política.

Ha sido definida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-132 de 2013 de la siguiente forma:



"Es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales". En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la constitución política"

Ahora bien, la facultad del Juez ordinario para efectuar un control de constitucionalidad difuso no es irrestricta o ilimitada conforme su particular entender de los principios y valores constitucionales, en palabras del intérprete legítimo de la constitución:

Dentro de la supremacía que tiene y debe tener la Constitución, esta se impone como el grado más alto dentro de la jerarquía de las normas, de manera que el contenido de las leyes y de las normas jurídicas generales está limitado por el de la Constitución. Así pues, debe existir siempre armonía entre los preceptos constitucionales y las normas jurídicas de inferior rango, y si no la hay, la Constitución Política de 1991 ordena de manera categórica que se apliquen las disposiciones constitucionales en aquellos casos en que sea manifiesta y no caprichosa, la incompatibilidad entre las mismas, por parte de las autoridades con plena competencia para ello.

Asimismo, en la sentencia T-681 DE 2016 emitida por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, es la que emite un listado taxativo de causales de procedencia en la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, así:

"Dicha facultad puede ser ejercida de manera oficiosa o a solicitud de parte cuando se está frente a alguna de las siguientes circunstancias:

- (i) La norma es contraria a las cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad, toda vez que "de ya existir un pronunciamiento judicial de carácter abstracto y concreto y con efectos erga omnes, la aplicación de tal excepción de inconstitucionalidad se hace inviable por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual cualquier providencia judicial, incluidas las de las acciones de tutela deberán acompasarse a la luz de la sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado;*
- (ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de*



Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

- (iii) *En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental[76]. En otras palabras, "puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales"*

De lo anteriormente expuesto, y atendiendo que las pruebas arrimadas no son suficientes para tomar una decisión que proceda en derecho, resulta viable inaplicar la orden legal contenida en el artículo 552 del CGP y anteponiendo el precepto constitucional contenido en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, resulta necesario decretar de manera oficiosa pruebas que logren llevar a un pleno convencimiento del juez al momento de resolver la objeción planteada dentro del trámite de negociación de deudas.

Lo anterior como quiera que, tal como se indicó, el objeto de esta instancia es determinar el monto de una obligación sometidas al proceso de insolvencia, frente a la que las partes indicaron con pruebas documentales, valores distintos, más específicamente, el solicitante manifiesta haber realizado un pago por un monto que el demandado Comedal desconoce, pues expresamente manifiesta que el pago está representado en un valor mucho menor. Esta situación lleva al despacho a la necesidad de apartarse de la norma, habida cuenta que no puede dilucidarse las circunstancias aludidas por las partes, sin que en efecto se practique la prueba de Oficiar a la entidad que recaudó el pago hecho por la demandante, pues en caso contrario, la decisión que se llegare a tomar afectaría el derecho de uno de los extremos, pues no se puede desconocer que de las pruebas allegadas, tenemos que: las dos están soportadas, además del dicho de su aportante, en documentos donde constan los hechos objetos de contradicción, por lo que en virtud de los Principios de Necesidad de la Prueba y de Contradicción, implícitos en el Derecho Fundamental al Debido Proceso, no es procedente un pronunciamiento de plano sino, reiteramos, previo a la decisión del despacho, el decreto y practica de la prueba de oficiar a la entidad recaudadora.

En ese estricto sentido, se dispone el despacho a oficiar a la entidad financiera Bancolombia S.A., para que en el término de dos (2) días remita a este despacho una certificación en la que consten las consignaciones realizadas a la cuenta de recaudo convenio 16019-COMEDAL, Referencia 1126246565, el pasado 28 de febrero de 2019.

Por lo anterior se,



RAMA JUDICIAL
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR-CESAR
REPÚBLICA DE COLOMBIA

RESUELVE

PRIMERO: Oficiar a la entidad Financiera Bancolombia S.A., **para que en el término de dos (2) días** remita a este despacho una certificación en la que consten las consignaciones realizadas a la cuenta de recaudo convenio 16019-COMEDAL, Referencia 1126246565, el pasado 28 de febrero de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

Firmado Por:

**CLAURIS AMALIA MORON BERMUDEZ
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL VALLEDUPAR**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

b5a094cc1f07411860c28bad5c39e449d01a4eb2f88dbd73a2f90d42fb21ad15

Documento generado en 10/05/2021 01:57:34 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**